

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 14 de mayo de 2025.

RESOLUCIÓN CA N.º 11/2025

VISTO:

El Expte CM N° 1788/2024 “Servicio Electrónico de Pago SA c/ provincia de Buenos Aires.”, en el cual la firma de referencia promueve la acción prevista en el art. 24, inc. b), del Convenio Multilateral contra a la Disposición N° 3729 dictada por la ARBA; y,

CONSIDERANDO:

Que la presentación se ha realizado cumplimentando las exigencias legales y reglamentarias en lo que hace a su aspecto formal, motivo por el cual corresponde su tratamiento.

Que la accionante se agravia, en primer lugar, por el recálculo en el coeficiente de ingresos en lo que respecta al “servicio cambio billetes de baja denominación”.

Narra que su actividad se centra en la prestación del servicio de cobro de facturas para las entidades adheridas al sistema conocido como “Pago Fácil”; como consecuencia de la misma, SEPSA es receptora de un significativo volumen de billetes en efectivo de baja denominación; en tal situación, SEPSA puede depositar dichos billetes junto a la restante recaudación en las cuentas bancarias constituidas a tal efecto, o “cambiar” los mismos a empresas que requieran billetes de baja denominación (“cambio”) para el desarrollo de sus actividades específicas, que proceden al recuento de los mismos y, en todos los casos, abonan a SEPSA una pequeña retribución por el servicio de provisión de billetes, equivalente a un porcentaje –más el IVA– del efectivo entregado.

Indica que el fisco consideró que los ingresos por cambio de billetes deben distribuirse entre todas las jurisdicciones, dado que corresponde a dinero colectado a través del servicio Pago Fácil que se presta en todo el país; por tal motivo, procedió a asignar tales ingresos de manera proporcional al volumen de transacciones de cada jurisdicción, tomando como parámetro el porcentaje asignado en el rubro principal “Ingresos por servicios”.

Agrega, respecto de su operatoria, que las empresas requirentes del servicio –que no son los agentes de SEPSA ni las prestatarias del servicio de cobro de facturas, sino terceras empresas– acuerdan con SEPSA la prestación del cambio de billetes en efectivo, mediante el cual obtienen billetes de distinta denominación, que les sirven para facilitar su operatoria comercial; SEPSA entrega el dinero en efectivo, una vez acreditada en la cuenta bancaria de SEPSA asignada a estos fines, la suma de dinero transferida por las empresas que necesitan contar con los billetes en efectivo; durante el año 2017, esa entrega se efectuaba habitualmente en la sede del Banco de la Nación Argentina ubicada en Plaza de Mayo, o en alguna otra sede o centro de servicios de la Compañía, siempre ubicada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dice que de lo expuesto, surge que:

-El servicio de “Provisión Cambio Billetes” constituye una actividad complementaria realizada por SEPSA, definitivamente no accesoria de su actividad de cobro de facturas;

si SEPSA hubiera depositado en las entidades bancarias dichos billetes de baja denominación, junto a la restante recaudación, este servicio no habría existido.

-Los prestatarios de este servicio son terceras empresas, distintas de aquellas que contratan con SEPSA la gestión de cobranza de sus propias facturas.

-No está controvertido en las presentes actuaciones que el domicilio de las empresas prestatarias esté ubicado en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni que el lugar de entrega del efectivo a dichas prestatarias haya sido en esta misma jurisdicción (conforme considerando de la Disposición 3729 –fs. 6, segundo párrafo– e Informe de Auditoría fs. 239 vta., primer párrafo).

-Por ende, si el servicio consiste en proveer efectivo en billetes de baja denominación a empresas que lo requieran para el desarrollo de su actividad, y dicha provisión se efectuó en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no cabe duda que los ingresos generados por dicho servicio debieron ser atribuidos a ésta, a efectos del cálculo del coeficiente unificado a que se refiere el Convenio Multilateral.

-En este contexto, resultan de aplicación al caso las previsiones del artículo 1º, inciso b), de la Resolución General CA N° 14/2017, donde se establece que en materia de *“Prestación de Servicios: Salvo que tengan un tratamiento específico en el Convenio Multilateral o por normas generales interpretativas, los ingresos por la prestación de servicios, cualquiera sea el lugar y la forma en que se hubieran contratado, se atribuirán a la jurisdicción donde el servicio sea efectivamente prestado, por sí o por terceras personas”*.

Que se agravia también del ajuste en el coeficiente de Gastos-Comisiones.

Indica que en esta materia, ARBA asignó a la provincia de Buenos Aires el 32,19 % de las comisiones erogadas por SEPSA a nivel país; según la Disposición, SEPSA mediante nota de fs. 147 expresó que *“...la asignación del rubro comisiones se efectúa apropiando a cada provincia en función de la cantidad de transacciones efectuadas por cada uno de los agentes según su domicilio...”*; la fiscalización actuante consideró que el pago de las comisiones tiene vinculación directa con la actividad generada por cada agente y la asignación efectuada por la firma no guarda relación con el volumen real de las transacciones realizadas en la provincia de Buenos Aires. Añade que en el Informe Final de Auditoría, se señala una presunta inconsistencia con el rubro de ingresos obtenidos por publicidad (“PMC”), el cual es asignado, según comunica SEPSA en la nota de fs. 156, teniendo en cuenta el criterio de volumen de transacciones: *“... (PMC) es distribuido de acuerdo con el domicilio de los agentes en proporción a las transacciones realizadas”*; en consecuencia, la fiscalización actuante realizó el ajuste correspondiente, tomando este parámetro (PMC) para ajustar la asignación de este rubro de gastos a provincia de Buenos Aires.

Impugna el criterio presuntivo utilizado por ARBA, puesto que es improcedente, dice, desplazar la registración contable y documentación respaldatoria en materia de gastos por comisiones abonadas a los agentes autorizados, para recurrir a un método de estimación indirecta: el universo de agentes de la empresa a quienes se les facturó por servicios de publicidad (PMC), es sensiblemente inferior a la cantidad de agentes que realizaron transacciones (cobro de facturas); de allí que la participación de esta provincia resulta más alta en publicidad que en el caso de las comisiones.

Indica que el sistema contable de SEPSA permite atribuir sobre base cierta (comisiones efectivamente abonadas) las comisiones correspondientes a las bocas de cobro ubicadas en 22 jurisdicciones (un mismo agente puede tener dos o más bocas de

cobro, ya sea en una misma jurisdicción o en jurisdicciones distintas, siendo un ejemplo típico el Correo Argentino); las dos jurisdicciones restantes son Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, ya que las registraciones contables asignan sobre base cierta las comisiones originadas en bocas de cobro ubicadas en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero agrupan las originadas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires, que incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires), por lo que éstas deben ser distribuidas entre ambas jurisdicciones en función de un prorrateo, basado en la cantidad de transacciones originadas en las bocas de cobro ubicadas en cada una de ellas; en el caso de la provincia de Buenos Aires, las comisiones originadas en este prorrateo se adicionan a las que corresponde atribuir a dicha provincia sobre base cierta, por tratarse de bocas de cobro ubicadas fuera del AMBA (adjunta certificación contable).

Agrega que del Anexo I que se adjuntó al descargo y que agrega a este escrito, surge que el PMC correspondiente al año 2017 se distribuyó considerando exclusivamente 1.445 (un mil cuatrocientos cuarenta y cinco) bocas de cobro, que generaron a su vez 18.770.877 (dieciocho millones setecientos setenta mil ochocientos setenta y siete) transacciones, lo que constituye un ínfimo porcentaje de las transacciones (menos del 11 %) y de las bocas de cobro (23,65 %), que originaron las comisiones; el PMC se distribuye en un universo muy inferior de bocas de cobro y transacciones porque responde a un concepto diferente: cuando SEPSA efectúa acciones promocionales y/o de publicidad, las aloca exclusivamente entre aquellos agentes/bocas de cobro que se han visto beneficiados por la acción realizada; por ende, de ningún modo pueden ser extrapolados esos porcentajes de atribución al rubro Comisiones, porque éste involucra un universo de bocas de cobro y transacciones absolutamente superior al considerado para la alocaación del PMC.

Que agrega prueba documental.

Que en respuesta al traslado corrido, la representación de la provincia de Buenos Aires señala que la cuestión a resolver se encuentra centrada en discernir el criterio de atribución de ingresos y gastos que corresponde aplicar durante el período ajustado (2018) por esta jurisdicción.

Que con relación al coeficiente de ingresos, señala que la ARBA cuestionó únicamente la atribución efectuada por la firma en el rubro “Provisión cambio billetes”, por entender que no es correcto otorgar el 100% de esos ingresos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fundamento en que la entrega de los billetes operó en la sede Plaza de Mayo del Banco de la Nación Argentina y que las empresas destinatarias de esos billetes tienen el domicilio en dicha jurisdicción.

Así, se consideró, dice, que la disponibilidad de dichos billetes que tuvo la firma, se generó en la operatoria realizada por la recurrente en todas las jurisdicciones, y, debido a que no pudo determinarse de manera precisa la contribución en cada jurisdicción, se estimó razonable atribuir esos ingresos de manera proporcional en función del volumen de transacciones realizadas en cada una de ellas; para ello, la fiscalización, entendió que el servicio de cambio de billetes de baja denominación (“Provisión cambio billetes”) tiene su razón de ser en el rubro principal de “ingresos por servicios”, encontrándose ambas actividades íntimamente vinculadas.

En esa línea de razonamiento, sostiene que no resulta acorde a la realidad económica considerar que la totalidad de los ingresos devengados por dicha actividad deba atribuirse únicamente a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ser el domicilio de entrega física de los billetes o domicilio de las empresas intervinientes en la operatoria, siendo incluso ello indiferente, en tanto la existencia misma de la actividad y, por tanto, de sus ingresos provienen de los billetes obtenidos en todas las sucursales o domicilios de los agentes por el servicio de cobro que efectivamente se produjo en cada una de ellas; en efecto, estos recursos o billetes de baja denominación, surgieron de una operatoria realizada por la firma en todas las jurisdicciones donde actuó, sin poder determinarse en forma precisa la contribución de cada una de ellas; por ello, no contando con la información detallada que le permitiera confeccionar la proporción a asignar a la provincia, y siendo que los billetes provenían de la actividad principal “Ingresos por servicios” –ya que le permitió hacerse de ese efectivo de menor cuantía para luego proceder a su cambio–, el fisco estimó razonable distribuir los ingresos provenientes de la “Provisión cambio billetes”, tomando como parámetro razonable para ello, el porcentaje asignado por la propia contribuyente a la jurisdicción en dicha actividad.

Al respecto, recuerda que ante la falta de certeza para efectuar la atribución de ingresos, los organismos de aplicación del Convenio Multilateral tienen dicho, en distintos precedentes, que la misma debe efectuarse conforme a un parámetro que responda lo más equitativamente posible a la realidad de los hechos y, en este sentido, no puede reprocharse la metodología empleada por la provincia para la atribución de los mismos, por cuanto luce acorde a la realidad económica que trasunta la operatoria y que, como principio, es rector en la aplicación del Convenio Multilateral (artículo 27).

Asimismo, afirma que dicha metodología se presenta razonable desde la finalidad del mencionado Convenio, el que *“...no solo se ha concebido para evitar la superposición Tributaria entre distintas jurisdicciones, sino que, conjuntamente con la distribución, entre ellas, de los ingresos de un sujeto tributario, pretende que cada una...se le atribuya, en general, una porción de dichos ingresos acorde a la magnitud de la actividad desarrollada por el contribuyente...”* (Res CA 36/2015 entre muchas otras concordantes).

Que con relación al coeficiente de gastos, señala que el ajuste realizado por la ARBA se limitó a la atribución del rubro “Comisiones” a la provincia de Buenos Aires. Al respecto, indica que la inspección actuante le requirió a la firma un detalle del criterio utilizado en los gastos de comisiones y de su asignación; de esta manera, la contribuyente –mediante nota obrante a fs. 147 del Expte. Adm.– manifestó que, *“...la asignación del rubro comisiones se efectúa apropiando a cada provincia en función de la cantidad de transacciones efectuadas por cada uno de los agentes según su domicilio...”*; asimismo, aportó un Anexo denominado “Base apertura comisiones agentes AMBA entre CABA y PBA” –CD de fs. 148 del Expte. Adm.–, que no detallaba todas las jurisdicciones y del AMBA no indicaba la parte correspondiente a la provincia de Buenos Aires.

En este orden de ideas, apunta que la fiscalización actuante verificó inconsistencias entre el porcentaje declarado por la contribuyente y el monto asignado al rubro, respecto a la cantidad de sucursales situadas en la provincia de Buenos Aires (conf. CD, aportado por la recurrente, de fs. 148 del Expte. Adm.) y debido a la falta de documentación para realizar una atribución con certeza, la ARBA utilizó el mismo criterio manifestado por la recurrente en este rubro –a fs. 147– y en el de servicios de

publicidad –PMC– (según nota de fs. 156 del Expte. Adm.), esto es, transacciones consumadas por la firma en cada jurisdicción, ya que se entendió que el pago de las comisiones tenía una relación directa con la actividad generada por cada agente; de esta manera, se estimó razonable aplicar el mismo porcentaje declarado por la contribuyente para el rubro PMC.

Alega que esta atribución no fue desvirtuada por la firma en ninguna instancia del procedimiento determinativo, en cuyo marco no adjuntó prueba alguna, sino que solo manifestó que acompañaría certificaciones contables, las que nunca se aportaron en el momento establecido legalmente.

En ese marco, respecto a la prueba documental anexada en esta oportunidad –certificaciones contables–, remarca que si bien la misma fue ofrecida en la instancia de la fiscalización, la recurrente no la acompañó en la oportunidad procesal otorgada por la normativa local que establece que este tipo de prueba debe agregarse al presentar el descargo contra el acto administrativo de inicio, el cual le fue notificado con fecha 7 de septiembre de 2023 (fs. 308 del Expte. Adm.) –cfr. art. 113 del Código Fiscal, Ley 10.397, TO 2011 y modificatorias–.

Advierte que dicha prueba recién se acompañó con la presentación del caso concreto ante la Comisión Arbitral, el día 20 de mayo de 2024. Al respecto, recuerda lo dispuesto por el art. 8° del Reglamento Procesal y a tenor de ello, indica que la firma pretende valerse en esta oportunidad de prueba ofrecida en el proceso de fiscalización que nunca acompañó, la cual se encontraba en su poder con anterioridad al dictado del acto atacado, a saber, 29 de abril de 2024 –ya que las certificaciones contables poseen fecha 18 de octubre de 2023–; así, intenta suplir su ineficiente probatoria, solicitando incorporar certificaciones contables, las cuales considera que no deben ser admitidas, conforme lo dispuesto por el art. 8° citado.

Sin perjuicio de todo ello, y con relación a la prueba acompañada para acreditar la distribución de las comisiones realizada por la empresa –indica que el ajuste efectuado al coeficiente de ingresos por la actividad de “Provisión cambio billetes” responde a una cuestión de criterio, y no probatoria–, entiende que la prueba documental presentada en esta instancia carece de entidad suficiente para desvirtuar el ajuste efectuado al respecto. En tal sentido, indica que la misma resulta parcial e imprecisa, y, por tanto, inconducente e insuficiente a los fines de resolver la presente controversia, a poco que se observa la documentación tenida a la vista por el profesional interviniente en su confección. Hace notar que, a diferencia de la certificación contable emitida por la actividad de “Provisión cambio billetes”, la referida a los pagos de comisiones se realizó sin tener en consideración las facturas emitidas por el pago de las mismas; asimismo, surge con claridad de su texto el objeto de la certificación, señalando el profesional expresamente que su tarea no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, no representa la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de certificación; agregando en el marco del deslinde de responsabilidades que efectúa en la misma, que la tarea se basó considerando que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, teniendo en cuenta su apariencia y estructura formal; ergo, resulta una descripción de la documentación tenida a la vista, entre la que se encuentran los papeles de trabajo confeccionados por la propia firma, sin sustento documental alguno que los avalen, reitera.

De esta manera, concluye que tampoco en esta instancia la recurrente aportó documental idónea para desvirtuar el ajuste.



Asimismo, trae a colación lo sostenido por los organismos de aplicación del Convenio, con relación a esta prueba: Resolución CP N° 28/2015, y entiende que las certificaciones contables resultan ser aptas para dar veracidad a la información que surge de la documentación que se acompaña, pero de ninguna manera puede reemplazarla, por lo que siendo que las certificaciones contables agregadas no están acompañadas con sus respaldos documentales ni fueron realizadas con la totalidad de la documentación necesaria, solo pueden evidenciar que fueron direccionadas para demostrar lo sostenido respecto de las comisiones, no resultando suficientes para desvirtuar lo actuado por la ARBA

Así, y en subsidio, de considerarse la eficacia probatoria de las certificaciones contables presentadas en esta oportunidad, pone en evidencia la contradicción de la propia firma, quien en oportunidad de presentar los papeles de trabajo muestra una asignación del rubro “comisiones” a provincia de Buenos Aires de un 9,18%, en contraposición con el 11,66% que surge del Anexo I, acompañado en esta ocasión.

De este modo, destaca que la actividad probatoria de la ARBA no fue de ninguna forma deficitaria ni arbitraria, sino que se procedió a realizar el ajuste, en base a la información que surgió de las constancias en autos. Va de suyo que la contribuyente no ha logrado conmovir la legitimidad del acto administrativo y la prueba acompañada en esta instancia, no resulta admisible ni conducente.

En la misma línea, recuerda una regla fundamental del procedimiento fiscal, esto es, la inversión de la carga probatoria, toda vez que es la recurrente quien debe argumentar y probar fehacientemente las razones por las que considera que el criterio de la Administración resulta erróneo o no ajustado a derecho; de esta manera, se desprende que es la firma quien tiene la carga de destruir, con pruebas fehacientes, la presunción de legitimidad que todo acto administrativo conlleva; y, toda vez que la resolución determinativa emanada por ARBA goza de tal presunción, queda en cabeza de la contribuyente de referencia demostrar acabadamente lo contrario; así, entiende que, a través de su recurso, Servicio Electrónico de Pago SA no logró probar lo que afirma.

Cita, respecto de la carga de la prueba, precedentes del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires y resoluciones de los organismos de aplicación del Convenio Multilateral; en consecuencia, y en virtud de la carencia probatoria señalada, sostiene que la intención de la recurrente en el punto resulta manifiestamente dogmática, pues existe una desconexión entre sus dichos y los hechos que invoca, la cual no fue revertida con prueba documental alguna y, de esta forma, impide que la Comisión Arbitral forme una convicción en el sentido que propugna, debiendo por tanto convalidarse la Disposición Delegada SEATYS N° 3729, todo lo cual solicita.

Que acompaña el expediente administrativo.

Que esta Comisión Arbitral observa que, conforme las alegaciones de las partes, la controversia radica en la asignación de ingresos por “provisión cambio billetes” y la atribución de gastos de comisiones.

Que, respecto del primer punto controvertido, asignación de ingresos por “provisión cambio billetes”, el accionante señala que el rubro “Provisión de billetes” hace referencia al ingreso que obtuvo Servicio Electrónico de Pago SA a cambio de la entrega de billetes físicos al Banco Nación Sucursal Plaza de Mayo obteniendo en contraprestación una transferencia bancaria de dinero; mediante esta operación SEPSA

obtiene un diferencial que es lo que se refleja en dicho rubro; al tratarse de una operación que se efectúa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 100% del ingreso de dicho rubro lo asigna a esta jurisdicción.

El fisco, por su parte, adiciona a dichos hechos un elemento que considera relevante: "... estos recursos o billetes de baja denominación, surgieron de una operatoria realizada por la firma en todas las jurisdicciones donde actuó, sin poder determinarse en forma precisa la contribución de cada una de ellas".

En efecto, cabe resaltar que considerando que la disponibilidad de fondos prestables por parte del contribuyente surge de la operatoria realizada por la firma en todas las jurisdicciones donde actúa, sin determinar de manera precisa la contribución de cada jurisdicción, se considera razonable distribuir los ingresos generados por ese excedente de fondos entre todas las jurisdicciones que generan dicho excedente; por ello, el fisco procedió a asignar tales ingresos a cada una de las jurisdicciones de manera proporcional al volumen de transacciones de cada una, tomando como parámetro para distribuir este rubro, el porcentaje asignado en el rubro principal "ingresos por servicios", lo que cabe confirmar.

Que, por lo demás, los organismos de aplicación del Convenio Multilateral tienen dicho, en distintos precedentes, que ante la falta de certeza para efectuar la atribución de ingresos, la misma debe efectuarse conforme a un parámetro que responda lo más equitativamente posible a la realidad de los hechos y, en este sentido, no habiendo el contribuyente acreditado el lugar en que se efectuó la prestación, no puede reprocharse la metodología empleada por la provincia de Buenos Aires para la atribución de los mismos, por cuanto luce acorde a la realidad económica que trasunta la operatoria y que, como principio, es rector en la aplicación del Convenio Multilateral (artículo 27).

Que, respecto del otro punto controvertido, la asignación de los gastos de comisiones pagadas por el contribuyente, corresponde puntualizar que analizadas las actuaciones administrativas, se observa que se efectuaron dos requerimientos al contribuyente solicitándole aportar la documentación de respaldo del rubro "Comisiones" del coeficiente de gastos en donde asigna a provincia de Buenos Aires el 9,18% del mismo.

En respuesta, y según consta en el soporte digital de fs. 148 (Ac.Ad.), el contribuyente presentó un detalle de comisiones en el que surgen transacciones correspondientes tanto a la provincia de Buenos Aires como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, dicho detalle carece de toda documentación respaldatoria. En el ámbito del expediente administrativo, el contribuyente no aportó los elementos necesarios para que el fisco pudiera convalidar la asignación de gastos y, ante la ausencia de elementos ciertos, este se vió obligado a aplicar un procedimiento de estimación.

Por otra parte, en esta instancia, el contribuyente presentó una certificación contable que, además de carecer de documentación respaldatoria, no permite verificar claramente que la información contenida en la misma convalide el criterio sostenido por el propio contribuyente; se advierte, incluso, una contradicción no explicada entre lo manifestado en su presentación y lo expresado en dicha certificación ofrecida como prueba. Caber observar que el accionante afirma: *"Para una mejor comprensión, diremos que el sistema contable de SEPSA permite atribuir sobre base cierta (comisiones efectivamente abonadas) las comisiones correspondientes a las bocas de cobro ubicadas en 22 jurisdicciones (n. de a.: a continuación, utilizaremos la denominación "bocas de*

*cobro” en sustitución de “agentes”, porque un mismo agente puede tener dos o más bocas de cobro, ya sea en una misma jurisdicción o en jurisdicciones distintas, siendo un ejemplo típico el Correo Argentino). Las dos jurisdicciones restantes son Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, ya que las registraciones contables asignan sobre base cierta las comisiones originadas en bocas de cobro ubicadas en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero agrupan las originadas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires, que incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires), por lo que éstas deben ser distribuidas entre ambas jurisdicciones en función de un prorrateo, basado en la cantidad de transacciones originadas en las bocas de cobro ubicadas en cada una de ellas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las comisiones originadas en este prorrateo se adicionan a las que corresponde atribuir a dicha provincia sobre base cierta, por tratarse de bocas de cobro ubicadas fuera del AMBA”.*

Al analizar la certificación contable, surge que la misma elabora la atribución del gasto en todos los casos por el parámetro “transacciones”, arrojando para la jurisdicción determinante un 11,66%, cuando el propio contribuyente había atribuido un 9,18%. Tampoco explica la citada certificación cómo vincula el número de transacciones con el monto de las comisiones, cuando el propio contribuyente explica que habría utilizado un criterio distinto, en el cual, para 22 jurisdicciones y en la provincia de Buenos Aires (excepto AMBA), atribuyó sobre las comisiones efectivamente abonadas, lo cual es diametralmente diferente al criterio que surge de la certificación aportada.

En consecuencia, la certificación contable afirma que el contribuyente aplicó un criterio distinto al sostenido en su propia presentación, sin que exista una explicación clara al respecto, lo que se ve agravado por la contradicción con su accionar previo; todo ello disminuye el valor probatorio de la certificación contable mencionada.

En cuanto a la razonabilidad de la presunción utilizada, cabe indicar que las alegaciones formuladas no resultan suficientemente contundentes; a ello se suma la ausencia de un parámetro alternativo que resulte más adecuado, por lo que corresponde ratificar, también en este punto, el ajuste practicado.

Que, consecuentemente, este decisorio genera efectos en cuanto a la asignación del coeficiente unificado expuesto en las declaraciones juradas de los periodos que abarca la Disposición N° 3729 dictada por la ARBA.

Que la Asesoría ha tomado la intervención que le compete.

Que esta resolución corresponde a una decisión adoptada en las reuniones de Comisión Arbitral realizadas el 9 de abril de 2025.

Por ello,

LA COMISIÓN ARBITRAL  
CONVENIO MULTILATERAL DEL 18/8/77  
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la acción interpuesta por Servicio Electrónico de Pago SA contra la Disposición N° 3729 dictada por la ARBA, conforme lo expuesto en los considerandos.





ARTÍCULO 2º.- Notifíquese a las partes y comuníquese a las demás jurisdicciones adheridas.

**SECRETARIO**

**PRESIDENTE**